

ROBIN KIRK

# El placer y la guerra digital

*Colombia se enfrenta a una paradoja mortal. Los únicos productos que los países desarrollados pagan bien son la cocaína y la heroína, pero su mejor cliente le castiga por suministrar precisamente lo que demandan sus consumidores.*

Un amigo me dijo una vez que la política colombiana era complicada, pero no confusa. Cabría decir lo contrario de la política estadounidense en Colombia, que es confusa, pero terriblemente sencilla.

Lo que está en juego es el placer, no la política. Los estadounidenses compramos narcóticos en cantidades ingentes, pero nos avergonzamos de lo que consideramos la parte podrida en el corazón de nuestra cultura. Se puede culpar a la ética del trabajo, cuya recompensa es el placer sin límites. O a nuestro legado puritano, a la televisión, al aburrimiento. Esa es la parte confusa.

El resultado es que, aun cuando compramos drogas, las declaramos ilegales. El presidente Richard Nixon fue el primero en declararles la guerra. En los tres decenios que siguieron, los ciudadanos estadounidenses gastaron miles de millones de dólares en comprarlas y después más miles de millones de dólares en castigar a quienes las vendían. La delincuencia resultante ha hecho que nos armenos como nunca se había armado ninguna otra nación en tiempo de paz. Y no obstante, hoy las drogas ilegales son más baratas, más potentes, más fáciles de conseguir y más populares que nunca.

Se avecinan las elecciones y la guerra contra las drogas reaparece en los discursos. Ningún candidato reconoce el asombroso fracaso de esta guerra. Ser duro con las drogas es una necesidad política, como besar bebés. Republicanos y demócratas comparten la opinión resumida por Al Gore: la cocaína y la heroína están en el lado erróneo de la "línea fundamental que divide lo correcto y lo erróneo en nuestras mentes y en nuestros corazones".

Quienes visitan por primera vez Washington suelen sorprenderse al ver que el Congreso funciona gracias a una veintena de "no-se-sabe-quiénes". Mientras los miembros electos se pronuncian sobre la televisión por cable, sus ayudantes discuten de política en despachos el doble de grandes que los dormitorios colectivos de las residencias universitarias. La guerra contra las drogas fue diseñada en estas salas. Al igual que yo, estos ayudantes crecieron en un caldo de estimulan-

Robin Kirk es autora de *The Monkey's Paw: New Chronicles from Peru*, coeditora de *The Peru Reader: History, Culture, Politics*, y responsable para Colombia de Human Rights Watch. Las opiniones aquí expresadas son de la autora y no reflejan los puntos de vista de esta organización.

Traducción: Berna Wang

tes recreativos. Sin embargo, al igual que Nixon y sus sucesores, no culpan de las drogas a los consumidores sino a los sitios donde causa menos agitación nacional: "por allí".

El "por allí" más relevante ahora es Colombia, que produce la mayor parte de la cocaína y la heroína que se vende en EE UU. Los traficantes colombianos dominan las redes de distribución y son unos exportadores imaginativos, pero Colombia tiene pocas opciones. El mercado global ya no quiere su café, su ganado ni sus plátanos. Como ha escrito el sociólogo español Manuel Castells, los "imperios cibernéticos" necesitan poco a Colombia y similares. Una de las pocas formas que quedan de participar es a través de la delincuencia: Castells lo llama la "conexión perversa". Las mafias rusas han establecido nuevos lazos con Colombia porque Rusia hace frente al mismo muro digital. El puerto de Turbo, que desde Florida domina el Caribe, es el escogido por los barcos rusos, que descargan AK-47 a cambio de drogas.

El eje de la política estadounidense contra las drogas es la erradicación aérea. Entre 1990 y 1998, más de mil millones de dólares de la ayuda se destinaron a apoyar a la policía en la fumigación del sur del país. La erradicación aérea es maravillosamente moderna. Se hace con máquinas y evita molestos enfrentamientos humanos, a diferencia de lo que ocurrió en los años ochenta, cuando los peruanos pagados por EE UU para arrancar los arbustos de coca fueron recibidos a tiros por los airados vecinos y amigos que los cultivaban. En Colombia, los pilotos del Departamento de Estado fumigan con pesticida de marca Round Up por la mañana y pueden estar de regreso por la tarde, a tiempo para tomar unas copas, sin poner los pies en tierra. Es Kosovo: los únicos daños colaterales son el maíz y las judías. Visité San José del Gaviare, desde donde salen estos vuelos. Los instructores estadounidenses parecían más unos locos de la informática que guerreros. Sus pantallas parpadeaban con las trayectorias en arco de los Turbo Trush que se dirigían a los campos cuya destrucción estaba prevista ese día.

La erradicación tiene desde hace tiempo el apoyo de los dos partidos: Clinton autorizó el primer vuelo en 1994. Cuando los republicanos ganaron la Cámara de Representantes, media docena de congresistas se apropiaron de la cuestión como una forma de despotricar contra la administración Clinton (como dijo un ayudante, "los *clintonistas* que fuman hierba, esnifan cocaína e inhalan heroína"). Entre los más poderosos está Dennis Hastert, republicano por Illinois y ex entrenador de lucha, que se convirtió en presidente de la Cámara tras la caída de Newt Gingrich y de Bob Livingston por sus pecadillos económicos y sexuales. Sin embargo, quien tiene más peso real es Benjamin Gilman (republicano por Nueva York), con 27 años de experiencia y presidente del poderoso Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara. Gilman ha citado reiteradamente a funcionarios de la administración ante el comité que preside para arremeter contra ellos por la "blandura" de la política de Clinton sobre las drogas. Los funcionarios respondían diligentemente con sus montañas de estadísticas. A veces parecía que el producto más importante de la guerra contra las drogas eran esas estadísticas, compiladas y ordenadas en un agobiante informe tras otro. En 1999, cualquier persona con lápiz y papel podía ver que EE UU iba perdiendo esa guerra, y de forma espectacular.

El día que visité San José del Guaviare, los pilotos permanecían inactivos por la lluvia. Se habían fumigado reiteradamente los campos, pero las “malditas plantas se negaban a morir”, dijo Pete, el jefe. Pete quería ir más allá, pero era demasiado lejos para los helicópteros: los traficantes saben que los escoltas de los helicópteros tienen una autonomía de vuelo de dos horas, por lo que se limitan a planear fuera de ese límite. Cuando los Turbo Trush vuelan solos, los pilotos corren el riesgo de ser derribados.

Pero la erradicación está condenada al fracaso por algo más que la simple logística. Desde que EE UU comenzó a fumigar, el cultivo de coca casi se ha duplicado, pasando de 67.200 hectáreas en 1996 a 101.800 en 1999, y sigue aumentando. Esto podría ser consecuencia directa de la política estadounidense. A finales de los años ochenta, Washington cortó las rutas aéreas que abastecían de coca peruana y boliviana a los laboratorios de refinado colombianos. En lugar de rendirse, los traficantes plantaron coca en los estados de Caquetá y Putumayo y abrieron nuevas áreas junto a la frontera con Venezuela.

Pero ¿y las detenciones de los cerebros, la espectacular muerte de Pablo Escobar y el encarcelamiento de los jefes del cartel de Cali? La eliminación de un traficante supone, una y otra vez, la llegada de otro. En 1997, la Agencia Antidroga estadounidense (la DEA) informó de que un grupo de hombres del Valle del Cauca había sustituido a los líderes del cartel de Cali encarcelados, que a su vez habían sustituido a Escobar. El negocio florece. El Ministerio de Economía calcula que, en 1998, los narcóticos reportaron entre 3.000 y 5.000 millones de dólares al año, constituyendo el principal ingreso del país.

El cambio de la coca a los cultivos locales hizo surgir otra novedad: la relación entre el narcotráfico y los ejércitos irregulares colombianos. Cuando visité el país en 1992, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Putumayo hacían cumplir la ley e imponían castigos. Del mismo modo que la guerrilla había recaudado “impuestos” entre los ganaderos y los perforadores de petróleo, en cuanto se introdujo la coca, la gravaron. Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) obtuvieron millones gracias a las drogas, pero es evidente que invierten las ganancias en la guerra. De forma análoga, los paramilitares también se benefician. Con la aquiescencia del ejército, y a veces con su apoyo abierto, controlan gran parte del norte del país, donde se refinan las drogas y se preparan para su envío. Venden protección a los empresarios, ganaderos y dueños de tierras, que a menudo son traficantes que han invertido sus fortunas en bienes inmobiliarios. El año pasado, la DEA citó el nombre de Carlos Castaño, principal líder paramilitar colombiano, como traficante por derecho propio.

La guerra derivada de ello ha convertido a Colombia en lo que un observador denomina un “archipiélago de sangrientas pequeñas repúblicas independientes”. Sólo en 1998, las autoridades registraron 194 matanzas cometidas por motivos políticos, lo que sobrepasa incluso las cifras de Argelia. Más de millón y medio de personas son refugiados internos, número que duplica el de albanokosovares que huyeron de los serbios en el punto culminante de su terror. La lucha contra las drogas no sólo ha fracasado contra los narcóticos, sino que ha empujado a Colombia al borde de la disolución.

*La lucha contra las drogas no sólo ha fracasado contra los narcóticos, sino que ha empujado a Colombia al borde de la disolución.*

No fue difícil hacer que Washington saliera del punto muerto. El general retirado Barry McCaffrey, asesor de política sobre drogas de Clinton, regresó de Colombia en 1999 como un profeta milenarista. “Colombia —exclamó— está en una situación próxima a la crisis”. Propuso un paquete de ayuda de mil millones de dólares para “apoyar al Gobierno colombiano en sus esfuerzos para reafirmar el control democrático”. Una ojeada al plan de McCaffrey muestra que, lejos de fortalecer la democracia, lo que propone es más erradicación. Será “aumentada”, en la jerga de Washington, lo que significa abrir las compuertas de la ayuda militar. Desgraciadamente para Colombia, eso es lo que quiere la mayoría de los estadounidenses. Una encuesta realizada en 1998 por la Escuela de Salud Pública de Harvard halló que, aunque la mayoría de la población estaba de acuerdo en que los esfuerzos de EE UU en la guerra contra las drogas habían sido infructuosos, apoyaban dedicar más recursos a estos mismos esfuerzos. El 86% creía que había que invertir más dinero para atacar las drogas “en su origen”.

La otra innovación del programa es que por primera vez arrastra al ejército colombiano, autor de múltiples abusos, a la guerra contra las drogas. McCaffrey alega que su pasado criminal es historia, conclusión que discuten los grupos de derechos humanos. Recién entrenado por EE UU y equipado con el armamento más moderno, prosigue esta teoría, el ejército derrotará la amenaza de la “narco-guerrilla”. Los encargados de formular la política estadounidense parecen haberse tragado toda la lógica criminal del ejército colombiano. Aunque los paramilitares son considerados responsables del 78% de las violaciones de derechos humanos, el ejército evita perseguirlos.

Sin duda, la pócima cuenta con la ayuda del olor a podrido de la retórica de la Guerra Fría, que los mandamases de Colombia siguen adoptando. En la mayor parte de los textos oficiales sobre la guerra contra las drogas, se pueden sustituir las palabras “guerra contra las drogas”, “cocaína” y “heroína” por “guerra contra el comunismo”, “comunistas” y “subversivos”, lo que permite que los veteranos gestores de Washington sigan justificando sus salarios con augurios sobre la próxima batalla. No estoy de acuerdo con la teoría de que existe una oscura conspiración, un complot de EE UU para invadir y gobernar Colombia desde el distrito federal imperial. Por el contrario, creo que la causa de esta situación es la falta de imaginación, la incapacidad somática para aceptar la caída del Muro y las nuevas realidades que ello ha creado.

Los estadounidenses no se atreven a una intervención directa, porque prefieren guerras cibernéticas como la de Kosovo. El accidente sufrido en julio por el avión espía RC-7B DeHavilland del ejército estadounidense en el departamento de Putumayo puso de relieve la creciente implicación de EE UU en la guerra de Colombia, pero también envió un estremecimiento al Capitolio: uno de los cinco militares que perdieron la vida fue una piloto de 29 años, capitán Jennifer Odom. Su marido, también oficial del ejército, dijo a los periodistas: “Los ciudadanos no apoyarían ninguna implicación en ningún país que vaya a costar vidas estadounidenses”.

Pese a los tambores de guerra y a la retórica de la Guerra Fría, el 106° periodo de sesiones del Congreso se suspendió en noviembre sin que hubiera aprobado ni un centavo más para Colombia. La administración Clinton dijo que ese asun-

to era menos importante que los Acuerdos de Wye Plantation, las cuotas pendientes de pago a la ONU y mil y un proyectos locales más. El dinero sigue estando sobre la mesa. Pero ahora que empieza en serio el año de las elecciones, Colombia podría quedar una vez más apartada. El gobernador George W. Bush y el vicepresidente Al Gore están tratando de encontrar la forma más *mediogénica* de culparse mutuamente de haber “perdido” Colombia. Lo crucial es que, si se pierde Colombia, hay que culpar contundentemente a un enemigo político.

Colombia se enfrenta a una paradoja mortal. Los únicos productos que los países desarrollados pagan bien son la cocaína y la heroína, pero los mejores clientes de Colombia la castigan por suministrar exactamente lo que se demanda. Mientras tanto, los beneficios de la droga van a parar a los fondos especiales de sus ejércitos, lo que es igual a decir que, lejos de remitir, es probable que esta guerra se intensifique. Los demócratas y los republicanos coinciden en que el proceso de paz está lleno de irregularidades sin solución y la opinión pública estadounidense quiere ver acción —aunque no necesariamente resultados— contra las drogas. “La mejor forma de hacerlo es decir que vamos a enviar dinero, un montón de dinero”.

Puede que lo que ocurra con el dinero no venga al caso.